Toluca de Lerdo, Estado de México a \_\_ de \_\_ de 2023.

**DIP.**

**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA**

**LXI LEGISLATURA DEL H. PODER LEGISLATIVO**

**DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO**

**P R E S E N T E**

**Honorable Asamblea:**

Quienes suscriben **MARÍA LUISA MENDOZA MONDRAGÓN Y CLAUDIA DESIREE MORALES** **ROBLEDO**, diputadas integrantes del **GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO** en la LXI Legislatura del Estado de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51 fracción II, 57 y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I, 30, 38 fracción I, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a la consideración de este Órgano legislativo, la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 2.186 BIS Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 2.241 DEL CÓDIGO PARA LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO,** con sustento en la siguiente:

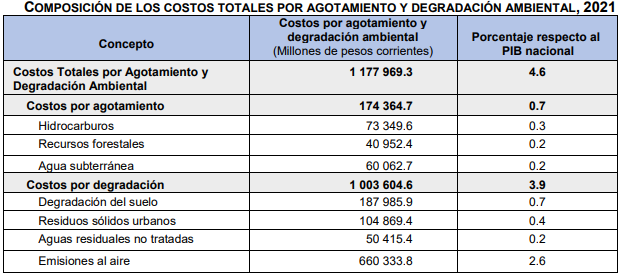
**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

La creación de una conciencia frente al inminente deterioro del medio ambiente ha conducido a cuestionar la idea tradicional del desarrollo en términos de eficiencia y explotación de los recursos existentes y a reconducirla hacia una concepción de desarrollo sostenible que tenga en cuenta e involucre tanto a las generaciones presentes como a las futuras[[1]](#footnote-1).

Por tal motivo, el desarrollo de las actividades industriales que implican un riesgo latente para la población, debido a que existe un riesgo en la medida que pueda producir un daño ambiental[[2]](#footnote-2), con o sin víctimas, justifica el que los titulares de estas actividades se sometan a un sistema de responsabilidad, con la finalidad de resarcirlo.

En dicho sistema, se basa el seguro ambiental, mismo que funciona como una garantía financiera exigible a toda persona física o jurídica, pública o privada que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos.

Para comprender el impacto que tiene el agotamiento de los recursos naturales ocasionados por la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que persiste en nuestro país, basta con los resultados obtenidos en el estudio “Cuentas Ecológicas y Económicas de México, 2021”[[3]](#footnote-3), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), donde destaca que durante 2021 los costos totales por agotamiento y degradación ambiental ascendieron a un 1 177 969.3 millones de pesos, siendo las emisiones al aire las que representaron el mayor costo ambiental al alcanzar un monto de 660 333.8 millones de pesos, seguida por los costos por degradación del suelo, con 187 985.9 millones de pesos y los residuos sólidos urbanos, con 104 869.4 millones de pesos.



(INEGI, 2021)

Durante 2020, el gasto en protección ambiental del sector público ascendió a 101 299 millones de pesos, equivalente a 0.46% del PIB nacional, mismos que se distribuyen de la siguiente forma: protección del aire-ambiente y clima 38.6%; gestión de aguas residuales 17.1%; gestión de los residuos 14.6%; gestión pública y educación 10.0%; investigación y desarrollo 9.7%; otras actividades de protección ambiental 4.3%; protección de la biodiversidad 4.0%; y agua y suelo 1.7%.

En este escenario, no solo el sector público debe hacerse cargo de los costos ambientales, por ello debe fomentarse la responsabilidad civil ambiental a través del *Pay Polluter Principle* (quien contamina paga), principio establecido en 1972 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que tiene por objetivo que los países miembros asignen costos de prevención de contaminación y medidas para el uso racional de los recursos naturales[[4]](#footnote-4).

En nuestro país, el Estado tiene el deber de garantizar a la sociedad el derecho a un ambiente sano, tal como lo establece el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[[5]](#footnote-5), en el que se señala que *“toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho.* ***El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. [Énfasis añadido]***

Asimismo, en el artículo 203 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se establece lo siguiente:

***Artículo 203.-*** *Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad,* ***será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable. [Énfasis añadido].***

Con la intención de remediar e indemnizar los daños ecológicos causados, diferentes países han incorporado en sus respectivas legislaciones ambientales el seguro ambiental como instrumento jurídico. Tal como sucede en la Unión Europea desde 1976, donde a partir de la Directiva Seveso[[6]](#footnote-6) se comienza el análisis comunitario de la responsabilidad civil y los riesgos ambientales en las actividades industriales.

Las primeras manifestaciones propiamente del seguro ambiental se realizaron en Estados Unidos, a partir de la década de los 70, motivado por la *National Environmental Policy Act* (Ley de Política Nacional Ambiental), en ésta, el aseguramiento del riesgo ambiental es cubierto normalmente por las empresas más desarrolladas en aquel país.

Este panorama cambió a inicios de los 80 con la aprobación de la *Comprenhensive Environmental Response, Compensation and Liability Act* (Ley General de Responsabilidad y Compensación Ambiental), misma que permitió el surgimiento del instrumento jurídico *Superfund*, (superfondo) que se implementó como un fondo reparador de los daños ambientales existentes y futuros. Este actúa mediante tres objetivos: 1. identificar los sitios que han sido contaminados por sustancias peligrosas; 2. limpieza de los sitios contaminados e identificados; y 3. obligar al responsable de la contaminación proveer lo necesario en los procesos de limpieza.[[7]](#footnote-7)

Otros hechos significativos en Europa, lo ha constituido el Libro Verde[[8]](#footnote-8) sobre reparación del daño ecológico de 1993, que apunta a establecer un fondo de indemnización financiado por los contaminadores potenciales y, por otro lado, establecer una responsabilidad contra contaminadores identificados, quienes, en el ejercicio de actividades contaminantes, atentan no sólo contra los bienes y la integridad corporal, sino también contra el medio ambiente.

En América Latina, diferentes países han legislado en la materia, tal es el caso de Chile, donde el contrato de seguro por daño ambiental fue incorporado por medio de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, misma que, entró en vigor en 1994, tomando un carácter de obligatorio para aquellos proyectos que aprecien como necesario el inicio de su actividad durante la etapa evaluativa de su respectivo estudio de impacto ambiental.[[9]](#footnote-9)

A partir de 1999 en Colombia, la Ley 491 establece como requisito obligatorio el deber de contar con un seguro ambiental para la realización de actividades generadoras de un potencial riesgo ambiental.[[10]](#footnote-10)

Y, en Argentina a partir del 2002 la Ley General del Ambiente dicho instrumento tiene por objeto garantizar la disponibilidad de fondos necesarios para recomponer el daño ambiental de incidencia colectiva, causado en forma accidental, independientemente de que dicho daño se manifieste en forma súbita o gradual.[[11]](#footnote-11)

Bajo la premisa de que todos los ciudadanos tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano y aquellos que contaminen serán responsables de los daños ecológicos causados, en nuestro país, el artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala que “***la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías*** *respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización, en aquellos casos expresamente señalados en el reglamento de la presente Ley, cuando durante la realización de las obras puedan producirse daños graves a los ecosistemas”.* ***[Énfasis añadido].***

Por lo que hace a nuestra entidad, el Código para la Biodiversidad del Estado de México establece en su artículo 2.308, señala esa misma atribución a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, conforme a lo siguiente:

**Artículo 2.308. La Secretaría podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de impacto ambiental, cuando durante la realización de las obras puedan producirse daños graves a los ecosistemas**, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como el costo de las medidas preventivas, de mitigación y demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. ***[Énfasis añadido].***

…

Asimismo, en el artículo 2.311 de dicho Código señala que la Secretaría será la responsable de determinar el monto de cobertura de la garantía

**Artículo 2.311. La valoración económica la realizará la Secretaría a efecto de determinar el monto de cobertura que deberá comprender la garantía financiera o la póliza de seguro** que se contrate con base en la evaluación de impacto ambiental que al efecto se requiera.

…

Conforme se ha expuesto, y en ánimo de fortalecer el seguro de responsabilidad, el objetivo de nuestra propuesta consiste en adicionar un artículo 2.186 Bis para establecer que quienes realicen actividades altamente riesgosas cuenten con un seguro o garantía, lo anterior, para homologarlo con el artículo 147 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, donde ya se prescribe dicho supuesto.

Con observancia al artículo 2.311 del Código citado, donde la Secretaría está facultada para determinar el monto de la garantía, consideramos pertinente especificar las medidas precautorias, mismas que estarán descritas en la adición de la fracción V del artículo 2.241 del mismo Código, y estás se calcularán con base en tres indicadores: 1) área total del medio ambiente susceptible de sufrir daños y/o alteración; 2) estimación de los costos económicos por las medidas correctivas o de remediación; y 3) evaluación del impacto ambiental provocado en la población o comunidades afectadas por su interacción con el ecosistema.

Consideramos que el seguro constituye un instrumento jurídico que sirve para prevenir y reparar los posibles daños ambientales, por lo cual se busca fortalecer dicho instrumento, para que el Estado se asegure de que, ante la ocurrencia de un siniestro y el incumplimiento del responsable de la actividad, el resarcimiento del daño se ejecute de manera ineludible.

Con la intención de contar con mayores elementos para facilitar la comprensión de las modificaciones planteadas en la presente iniciativa, se hace un estudio comparativo entre el texto de la norma vigente y el que la reforma propone modificar, como se muestra a continuación:

**Código para la Biodiversidad del Estado de México**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ley Vigente** | **Iniciativa** |
| Sin correlativo. | **Artículo 2.186 Bis. Quienes realicen actividades altamente riesgosas, deberán contar con un seguro de responsabilidad civil.** |
| **Artículo 2.241**. …  I. a IV. …  Sin correlativo  … | **Artículo 2.241.** …  I. a IV. …  **V. La prestación de seguros de responsabilidad y coberturas en todas las actividades consideradas como peligrosas y potencialmente contaminantes.**  **Los montos de los seguros y coberturas serán calculados por la Secretaría sobre la base de:**  **a) El área total del medio ambiente susceptible de sufrir daños y/o alteración;**  **b) Estimación de los costos económicos por las medidas correctivas o de remediación; y**  **c) Evaluación del impacto ambiental provocado en la población o comunidades afectadas por su interacción con el ecosistema.**  … |

Motivadas por la creciente incidencia de accidentes o prácticas ambientales riesgosas desarrolladas por actividades industriales y de servicios que producen como efecto la contaminación, con repercusiones perniciosas sobre los elementos y los recursos naturales, así como sobre la salud de las personas, las integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México estamos convencidas que quien contamine asuma el costo de la reparación, evitando que sea el Estado el responsable último ante el incumplimiento del particular.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este H. Poder Legislativo del Estado de México, para su análisis, discusión y en su caso aprobación en sus términos, la presente: **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 2.186 BIS Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 2.241 DEL CÓDIGO PARA LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO.**

**A T E N T A M E N T E**

**DIP. MARÍA LUISA MENDOZA MONDRAGÓN**

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

**DECRETO NÚMERO**

**LA LXI LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO**

**DECRETA:**

**ÚNICO.** Se adiciona un artículo 2.186 Bis y se adiciona una fracción V al artículo 2.241 del Código para la Biodiversidad del Estado de México, para quedar como sigue:

Artículo 2.186 Bis. Quienes realicen actividades altamente riesgosas, deberán contar con un seguro de responsabilidad civil.

Artículo 2.241. …

I. a IV. …

V. La prestación de seguros de responsabilidad y coberturas en todas las actividades consideradas como peligrosas y potencialmente contaminantes.

Los montos de los seguros y coberturas serán calculados por la Secretaría sobre la base de:

a) El área total del medio ambiente susceptible de sufrir daños y/o alteración;

b) Estimación de los costos económicos por las medidas correctivas o de remediación; y

c) Evaluación del impacto ambiental provocado en la población o comunidades afectadas por su interacción con el ecosistema.

…

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Publíquese el presente decreto en el periódico oficial “Gaceta de Gobierno”.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México.

El titular del Poder Legislativo lo tendrá por entendido, haciendo que se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la Ciudad de Toluca, Capital del Estado de México, a los días \_\_ del mes de \_\_\_ de dos mil veintitrés.

1. Alba, Andrea y Rodríguez-Chona, S. (2009). *Seguro ambiental: situación actual e inconvenientes de su implementación*. RIS. Véase en: <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/14883/12018> [↑](#footnote-ref-1)
2. Dentro del concepto de daño ambiental, se incluyen tanto los daños que afectan al medio ambiente propiamente dicho, y en un sentido más amplio los que afectan la salud, el patrimonio, bienes y derechos de las personas. [↑](#footnote-ref-2)
3. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). *Cuentas Ecológicas y Económicas de México, 2021*. Véase en: <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/CEEM/CEEM2021.pdf> [↑](#footnote-ref-3)
4. Tribunal de Cuentas Europeo. (s/f) *Principio de «quien contamina paga»: Aplicación incoherente entre las políticas y acciones medioambientales de la UE.* Véase en: <https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_12/SR_polluter_pays_principle_ES.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
5. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 18 de noviembre de 2022. Véase en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf> [↑](#footnote-ref-5)
6. En legislación de seguridad, esta Directiva se conoce tradicionalmente con el nombre de SEVESO por el nombre de la ciudad donde tuvo lugar un accidente industrial en 1976 en una pequeña planta química de este municipio en la región de Lombardía, en Italia. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pinilia, Francisco. (2003). *Algunas consideraciones en torno al seguro ambiental: panorama comparado y situación dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental vigente en Chile.* Revista de Derecho Valdivia. Véase en: <https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09502003000200007&script=sci_arttext#r3> [↑](#footnote-ref-7)
8. Pernas, Ana. (1993-1994). *Libro Verde sobre reparación del daño ecológico*. Dialnet. Véase en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=769330> [↑](#footnote-ref-8)
9. ídem [↑](#footnote-ref-9)
10. Robledo, L. (2014). *El seguro ambiental en Colombia: Aproximación inicial.* Revista Fasecolda, Véase en: <https://revista.fasecolda.com/index.php/revfasecolda/article/view/102> [↑](#footnote-ref-10)
11. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (S/F). *Seguro Ambiental.* Véase en: <https://www.argentina.gob.ar/ambiente/control/seguro-ambiental> [↑](#footnote-ref-11)